17/12/2024 OPINIÓN





Ruiz-Healy Times

Eduardo Ruiz-Healy @ruizhealy

Infonavit y la centralización del poder

a transformación del Infonavit y la extinción de organismos autónomos han avivado un debate crucial sobre el rumbo de la administración pública en México. Mientras que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum argumenta que estos cambios buscan eficiencia y ahorro, sus críticos temen que estén sacrificando la transparencia y los contrapesos necesarios para garantizar la democracia.

El Infonavit, institución que ha sido esencial para millones de trabajadores, no ha escapado a esta reconfiguración. Las recientes reformas a su ley introducen cambios significativos en su estructura interna y órganos de gobierno. Entre ellos destacan la fusión de áreas administrativas, la reestructuración de direcciones clave y un control más centralizado por parte del gobierno federal. Según los defensores de estas modificaciones, simplificar la administración permitirá optimizar los recursos y beneficiar a quienes más lo necesitan.

Uno de los ajustes más relevantes afecta a su Consejo de Administración, que antes equilibraba las perspectivas del sector obrero, empresarial y gubernamental. Ahora, el gobierno federal tendrá mayor influencia en este órgano, debilitando un modelo de contrapesos que, si bien no era perfecto, garantizaba cierta pluralidad en las decisiones del Instituto.

Los críticos de estas reformas advierten que esta centralización del poder podría abrir la puerta a decisiones discrecionales que vulneren los derechos de los beneficiarios. En un país donde 80% de las personas gana hasta cinco salarios mínimos, según el Inegi, la vivienda digna debe depender de instituciones sólidas y transparentes y no solo de la política.

Estas transformaciones en el Infonavit no deben analizarse de manera aislada. La reciente extinción de organismos autónomos es un reflejo de cómo la actual administración concibe la gestión pública: menos descentralización, más control desde el Poder Ejecutivo. Las medidas han sido justificadas bajo el discurso de austeridad y combate a la corrupción, pero generan dudas sobre las consecuencias para la rendición de cuentas y la autonomía institucional.

Aunque la centralización puede traer beneficios a corto plazo, como mayor agilidad en las decisiones y ahorros administrativos, el debilitamiento de los contrapesos democráticos plantea riesgos serios. México tiene antecedentes claros de cómo el exceso de control político en instituciones públicas deriva en mayor opacidad, corrupción y daño a la de por sí mínima confianza ciudadana.

Es indudable que el Infonavit necesita modernizarse para responder a las necesidades de los trabajadores, especialmente en un entorno económico tan desigual. Sin embargo, las reformas deben incluir mecanismos claros de supervisión que garanticen que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, sin comprometer los principios de transparencia y equidad, y no tengan otro destino.

El reto está en equilibrar la eficiencia con la rendición de cuentas. Los mexicanos debemos vigilar de cerca estas transformaciones y exigir que cumplan su propósito sin sacrificar derechos ni comprometer la democracia. La historia ha demostrado que un poder sin contrapesos solo beneficia a unos cuantos y deja en el abandono a los millones que supuestamente serían los beneficiados por dichos cambios.

- f Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
- Instagram: ruizhealy
- Sitio: ruizhealytimes.com